

Fuego y barricadas

*Retratos de la
beligerancia popular
en la Argentina
democrática*

Javier Auyero

Este artículo argumenta que las protestas de diciembre de 2001 deben ser enmarcadas en los cambios que el repertorio de acción colectiva ha sufrido en los últimos tiempos en Argentina. Centrándose en dos casos de beligerancia colectiva paradigmáticos, el Santiagazo de 1993 y la pueblada de Cutral-co y Plaza Huincul en 1996, este artículo examina algunas características de este repertorio prestando particular atención a sus causas estructurales, a las modalidades que adquirió la protesta, y a las experiencias de sus protagonistas.

Si bien inéditos por su magnitud y por sus consecuencias, los episodios de diciembre de 2001 –en los que una combinación de saqueos, cortes de calles y rutas, y cacerolazos hizo renunciar a un presidente votado por 48% de la población dos años antes– deben ser enmarcados en los cambios que la acción colectiva ha sufrido en los últimos tiempos en Argentina. Lejos de ser una «explosión» de una ciudadanía que hasta entonces parecía «ensimismada, incapaz de expresar su descontento»¹, diciembre representa el punto álgido de un pro-

Javier Auyero: profesor del departamento de Sociología de la State University of New York-Stony Brook y miembro del Cecyp - Fundación del Sur (Centro de Estudios en Cultura y Política), Buenos Aires. Es autor de *Poor People's Politics* (Duke University Press, 2001), que obtuvo el premio al mejor libro del año del New England Council of Latin American Studies y fue finalista del C. Wright Mills Award. Versión en español: *La política de los pobres. Las prácticas clientelísticas del peronismo*, Manantial, Buenos Aires. Es autor también de varios artículos publicados en numerosas revistas académicas. Su próximo libro, *Contentious Lives. Two Women, Two Protests, and the Quest for Recognition*, será publicado por Duke University Press en 2003.

Nota: Quiero agradecer la entusiasta colaboración y aporte crítico de Laura Zambrini y Rodrigo Hobert, quienes trabajaron como asistentes de investigación en este proyecto, y los comentarios de Gastón Beltrán, Lucas Rubinich y Mark Healey. Esta investigación fue financiada por una beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. La mayoría de los testimonios citados en este artículo fueron recogidos durante mi trabajo de campo realizado entre 1999 y 2001. Las fuentes secundarias sobre las que se basa esta investigación incluyen tres periódicos nacionales (*Clarín*, *La Nación* y *Página 12*) y varios periódicos provinciales (*La Mañana del Sur*, *Río Negro*, *El Litoral*, *El Liberal*, *Diario Norte*, y *El Tribuno*).

Palabras clave: protesta popular, acción colectiva, movimientos sociales, Argentina.

ceso de movilización popular que lleva casi una década. La primera parte de este artículo examina este proceso prestando particular atención a sus causas estructurales y a las modalidades que adquirió la protesta. La segunda, centrada en un trabajo etnográfico sobre dos episodios de beligerancia colectiva paradigmáticos (el Santiagazo de 1993 y la pueblada de Cutral-co y Plaza Huincul en 1996), describe las experiencias de los manifestantes, esto es, la protesta vivida.

Dos momentos de la última década sirven para ejemplificar las recientes formas de la protesta. Entre abril y junio de 1997, cortes de ruta en demanda de empleo y ataques a edificios públicos se multiplican en el país. En abril, las ciudades de Cutral-co y Plaza Huincul, en la provincia del Neuquén, son sitiadas durante varios días en reclamo del cumplimiento de las promesas realizadas por el gobernador luego que los habitantes de la zona realizaran su primera «pueblada» en reclamo de fuentes de trabajo en junio de 1996. Tres meses más tarde, autoridades del gobierno provincial y municipal fueron tomadas como rehenes por unos 300 manifestantes que reclamaban el aumento en los subsidios de empleo en el edificio municipal de Cutral-co. En mayo, cortes de ruta, organizados por gremios municipales y organizaciones de desempleados, aislaron la provincia de Jujuy durante 12 días, a consecuencia de lo cual el gabinete del entonces gobernador Ferraro presentó su renuncia. Cutral-co y Jujuy tal vez sean los casos más recordados pero no los únicos. En estos meses, «piqueteros», «fogoneros» y «zanjeros» cortan la ruta nacional 3 en Trelew (Chubut) durante un día en demanda de puestos de trabajo; vecinos y desocupados organizados en una multisectorial interrumpen el tráfico en la ruta nacional 38 en Cruz del Eje (Córdoba); trabajadores municipales que piden la incorporación a la planta permanente y el pago de sueldos atrasados cortan la ruta 11 en Capitán Bermúdez (Santa Fe). En estos meses, cortes de rutas nacionales y provinciales también ocurren en Catriel (Río Negro), Banda del Río Salí (Tucumán), y en la ciudad de Neuquén, mientras que los maestros de todo el país confluyen en la Plaza de los Dos Congresos (Buenos Aires) y levantan allí la llamada Carpa Blanca. A propósito del prolongado corte de la ruta 34 en Tartagal y General Mosconi en mayo, el gobernador salteño Romero (no precisamente un simpatizante de esta forma de protesta) es quien mejor resumió lo que ocurría en este periodo de movilización popular al referirse al corte de ruta como «una práctica de acción política que se está divulgando en todo el país».

Luego de poco más de tres años, en noviembre de 2000, esta forma de protesta ya ha sido aprendida y adoptada en todo el país. Cortes se suceden en Isidro

***El desempleo,
 el hambre,
 o la necesidad
 económica
 no conducen
 necesariamente
 al corte de ruta
 ni a la quema
 de un edificio***

Casanova, Esteban Echeverría, y Glew (Gran Buenos Aires), Plottier (Neuquén), Salvador Mazza, Tartagal, General Mosconi, Cuña Muerta y Zanja Honda (Salta), Libertador General San Martín (Jujuy), Resistencia (Chaco), Belén (Catamarca).

Analistas locales y extranjeros han señalado la pobreza y el desempleo como razón y sentido de este ciclo de protesta; los llamados «estallidos», los cortes de ruta, y las puebladas que se generalizaron en el país durante los años 90 son, desde este sentido común

dominante, respuestas a la falta de un estímulo económico. Para «explicar» la protesta bastaría, desde este punto de vista, con mencionar una subida en la tasa de desempleo, el crecimiento de los niveles de pobreza, falta de pago a empleados públicos, o (en el caso de los últimos cacerolazos) la indebida retención de los depósitos bancarios. Desde esta perspectiva, las acciones beligerantes de la multitud son vistas como intromisiones en el curso rutinario de los eventos, como compulsiones casi mecánicas, poco concientes y poco organizadas, caóticas. El historiador inglés E.P Thompson denominó a esta perspectiva «visión espasmódica de la historia popular». En su clásico texto sobre la economía moral de la multitud inglesa, este autor formula preguntas que servirán de punto de partida a este ensayo: «Cuando tiene hambre, ¿qué hace la gente? ¿Cómo es su comportamiento modificado por la costumbre, la cultura y la razón?». Preguntas que le permitirán adentrarse en las experiencias de la rebelión popular, en las maneras en que ésta es vivida y sentida. Preguntas que utilizaré de guía para cuestionar la ecuación «desempleo + pobreza = protesta». No hace falta demasiado análisis para darse cuenta que los desempleados que cortan una ruta no tienen trabajo, pero el desempleo, el hambre, o la necesidad económica no conducen necesariamente al corte de ruta ni a la quema de un edificio. Constituyen sí las bases sobre las cuales se erige la beligerancia popular, pero la forma de la protesta tiene que ver con procesos políticos y con formas de reclamo aprendidas en repetidos enfrentamientos con el Estado y con su relativo éxito y/o fracaso.

Entre los numerosos observadores de las nuevas formas de protesta quizás sea Marina Farinetti quien más detalladamente ha diagnosticado las mutaciones en la beligerancia popular ocurridas a partir de los inicios de la década de los 90². De acuerdo con ella, dicha década está marcada por el *desplazamiento* del

2. Pueden consultarse también los trabajos de Federico Schuster y Adrián Scribano.

conflicto laboral del área industrial al sector público, la *disminución* de reclamos por aumentos salariales y el *crecimiento* de demandas por pago de salarios adeudados y por despidos, la *disminución* de huelgas y el *aumento* de cortes de ruta, ollas populares y huelgas de hambre como modos de acción colectiva, el *incremento* de la frecuencia de la protesta en las provincias, y el *creciente protagonismo* de los gremios provinciales y municipales como actores centrales del conflicto.

A pesar de la gran variedad de formas de protesta habidas durante los años 90, las modalidades con que la gente común formula sus reclamos parecen agruparse en un conjunto limitado y bastante bien definido de tipos de acción. Estas formas no cambian radicalmente entre una fase y la otra (digamos entre abril y junio de 1997 y noviembre de 2000) cuando actores similares son quienes activan la protesta (desocupados y/o empleados públicos). Es más, los manifestantes se dan cuenta de esta recurrencia al referirse, pública y análogamente, tanto a sus acciones y a las acciones de otros (*el corte*) como a sus autodefiniciones y a las de otros manifestantes (siendo *piqueteros* la denominación que comienza a aparecer con más frecuencia). Tenemos, entonces, todas las indicaciones que señalan la emergencia de una forma de protestar, «un conjunto limitado de rutinas que son aprendidas, compartidas y ejercitadas mediante un proceso de selección relativamente deliberado» (Tilly) mediante las cuales grupos sociales formulan colectivamente reclamos al Estado; esto es, tenemos los indicios de la conformación de un *repertorio de acción colectiva*.

Cortes vs. huelgas: falsa dicotomía

Conviene, sin embargo, no exagerar el carácter novedoso de las formas y sentidos de la protesta a los efectos de no perder de vista la continuidad que existe con modalidades previas de lucha. Estas «nuevas formas» no reemplazan a otras, como la huelga y la manifestación callejera, ni tampoco pueden ser asociadas simplemente a una demanda en particular como el reclamo de empleo³. Por el contrario, cortes y paros, ataques a edificios y manifestaciones, campamentos y huelgas, conviven, se complementan y se potencian de acuerdo con su relativo éxito o fracaso en la satisfacción de demandas. Si bien la forma «corte de ruta» está predominantemente asociada a la demanda de trabajo y de subsidios de empleo (los llamados Planes Trabajar), no puede ser vinculada de manera directa y exclusiva con un tipo de reclamo, como lo demuestran los ganaderos con sus

3. Los informes del Centro de Estudios Nueva Mayoría, ampliamente citados por periodistas y analistas locales, son el mejor ejemplo de esta dicotomía.

***La diversidad
 de la beligerancia
 popular
 fue enfrentada
 por las elites
 gubernamentales
 con una combinación
 de negociación,
 brutal represión,
 y los usuales intentos
 clasificadores/
 criminilizadores***

cortes de ruta en protesta por el resurgimiento de la fiebre aftosa en Formosa, los trabajadores del ingenio La Esperanza en San Pedro (Jujuy) en demanda del pago de salarios atrasados, o los grupos indígenas bloqueando el paso en la ruta 34 en Salta en demanda de tierras (noviembre de 2000). Si bien los desocupados adquieren prominencia en los cortes de ruta, los sindicatos de empleados estatales y los gremios docentes (en Jujuy en 1993, 1995 y 1997, o en Neuquén en 1997, p. ej.), organizaciones de segundo grado (la Central Argentina de Trabajadores en los cortes de ruta en el Gran Buenos Aires), y otros tipos de organización (frentes barriales, comisiones vecinales, etc.) también adoptan esta forma de lucha colectiva. Quizás sean las huelgas de 1997 (agosto) y 2000 (junio), llevadas a cabo durante los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa, las que mejor grafiquen esta coexistencia de formas establecidas de protesta con otras emergentes. El paro general de 1997 combinó cortes de ruta, ollas populares, manifestaciones y piquetes de huelga en todo el país. El de 2000 incluyó cortes de puentes (Misiones y Capital Federal), de rutas (Jujuy y Chubut), de vías ferroviarias (Castelar, Gran Buenos Aires), ataques a oficinas de Repsol-YPF (Neuquén) y del Citibank (Santa Fe y San Juan), pedradas contra edificios públicos (Secretaría de Educación en Neuquén), y bloqueos a destilerías (Ensenada, provincia de Buenos Aires).

Por último, la dicotomía huelga (de trabajadores) / cortes de ruta (de desempleados) nos puede hacer perder de vista el encadenamiento de las emergentes formas de protesta durante los años 90 con otras predominantes durante los 80: quizás haga falta recordar que uno de los líderes de la Federación de Tierras y Vivienda (Luis D'Elia), organización clave durante los cortes de ruta en el Gran Buenos Aires, fue también uno de los organizadores de las tomas de tierras (asentamientos poblacionales en tierras fiscales y/o privadas) durante la dictadura y el primer gobierno democrático (Merklen). Cuando en noviembre de 2000 las autoridades de los gobiernos provincial y nacional no admitían las demandas de quienes cortaban la ruta en La Matanza, uno de los piqueteros, sintetizando en un solo comentario lo que a muchos observadores de las protestas en Argentina pareciera que se les escapa en sus intentos por construir modelos dicotómicos de la acción colectiva, decía: «Si es necesario, les vamos a armar un asentamiento en la ruta».

Los sospechosos de siempre

La diversidad de la beligerancia popular fue enfrentada por las elites gubernamentales con una combinación de *negociación* (en la que el reparto de planes de empleo y de comida, muchas veces a través de mecanismos clientelares que dieron lugar a nuevas protestas, y el temor al «contagio» o el «efecto dominó» cada vez que los manifestantes obtenían parte de sus demandas, fueron dominantes), brutal *represión* (previo a los eventos de diciembre de 2001, entre 1995 y 2001, cientos de manifestantes fueron heridos y ocho murieron durante enfrentamientos con la policía y/o gendarmería –Víctor Choque en Ushuaia, 1995; Teresa Rodríguez en Cutral-co, 1997; Francisco Escobar y Mauro Ojeda en Corrientes, 1999; Aníbal Verón, Carlos Santillán, Oscar Barrios y Víctor Jofré en Salta entre 2000 y 2001, este último murió de un infarto al quedar atrapado en medio de la represión–), y los usuales intentos *clasificadores/criminalizadores* que funcionarios, tanto del gobierno menemista como de la Alianza y de los gobernadores provinciales, utilizaron para ver en cada marcha, en cada corte, en cada demostración de oposición a una multitud inocente liderada por activistas, un «pasivo instrumento de agitadores externos», como diría George Rudé. Estas acusaciones varían desde el ya usual mote de «subversivos» de procedencia disímil (militantes de Sendero Luminoso ocultos entre las «hordas» en Santiago del Estero en 1993, activistas de Quebracho al acecho entre los «vándalos» y «criminales» en Cutral-co en 1997), al más imaginativo pero tampoco probado («los piqueteros [salteños, en mayo de 1997] fueron comprados por los traficantes de drogas para que los gendarmes se concentren en la ruta y dejen de custodiar la frontera»), pasando por la visión de la protesta como producto de «activistas perfectamente entrenados» (Salta, junio de 2001) hasta la infame (y finalmente letal) acusación de «enemigos de la república» a los protagonistas de los eventos de diciembre de 2001 por parte del entonces presidente De la Rúa.

Desproletarización, retirada del Estado, descentralización

El contexto estructural de este aumento de la beligerancia popular está caracterizado por tres procesos que, si bien pueden ser separados analíticamente, se encuentran en la raíz de la protesta de manera simultánea y se refuerzan mutuamente: 1) desproletarización; 2) retirada del Estado en su función de bienestar; y 3) descentralización de los servicios educativos y de la salud.

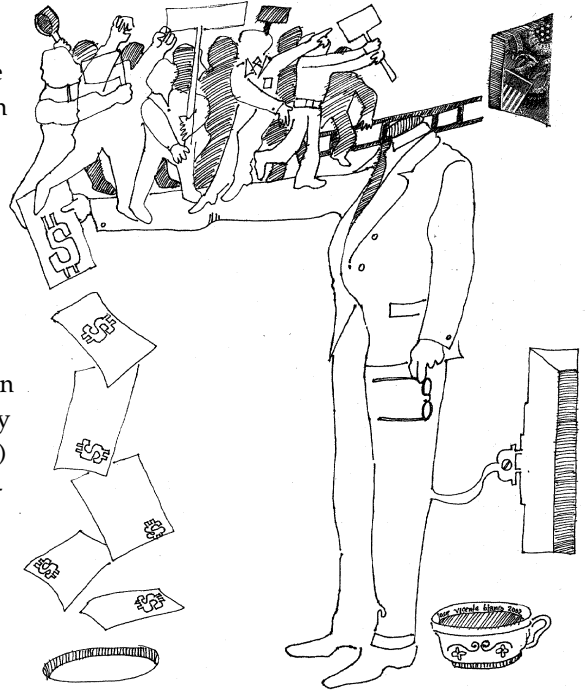
1. El aumento explosivo de la desocupación producto de la desindustrialización del país y de la desconexión funcional entre las tendencias macroeconómicas y

los niveles de empleo (la tasa de desempleo subió de 5% de la población económicamente activa en 1974, a 18% en 2001; desde el lanzamiento del Plan de Convertibilidad en 1991, el desempleo creció 200%) ha sido objeto de numerosos y detallados estudios por lo que no me detendré aquí en este aspecto (se pueden consultar los excelentes trabajos de Beccaria/López; Murmis/Feldman). Como sintetiza Aronskind: «Los pobres eran 21,5% de la población en 1991, y 27% al final del periodo (en 2000). Los indigentes eran 3% de la población, para alcanzar 7% en 2000. Los desocupados y subocupados, aproximadamente 1.600.000 personas al comienzo de la década, superaban los 4.000.000 al fin de la misma».

2. La retirada y el desmantelamiento del Estado de bienestar-populista hace que los riesgos implicados en situaciones de privación material sean aún mayores. En la última década, la Argentina ha asistido a un proceso de constante degradación del sistema público de educación, de salud y de las políticas de vivienda dedicadas a sectores de bajos ingresos. El carácter caótico de las políticas destinadas a «combatir el desempleo» y de las políticas sociales destinadas a «combatir la pobreza» hace que la situación sea aún peor: los pobres son cada vez más débiles y están cada día más desprotegidos. El Estado ha exhibido una particular indiferencia respecto del destino de los desempleados: el seguro de desempleo solo cubre a una exigua proporción de quienes perdieron su trabajo y el dinero otorgado en cada subsidio no alcanza para cubrir sus necesidades básicas. La privatización de las empresas estatales no es solo otro aspecto de la retirada estatal de las funciones básicas sino que tiene un importante impacto en los niveles de empleo. Entre 1989 y 1999, aproximadamente 150.000 trabajadores perdieron sus trabajos como consecuencia directa del proceso de privatización. En 1989, cerca de medio millón de trabajadores estaban empleados en las compañías estatales de teléfono, correos, aviación, agua, energía, transporte ferroviario y gas. En 1999, estas empresas ocupan a 75.000. Como veremos, el caso de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) es de particular importancia dado que muchos de sus despidos ocurren en comunidades cuya existencia depende en buena medida de la presencia de esta empresa (Cutralco y Plaza Huincul en Neuquén, y Tartagal y General Mosconi en Salta).

3. El proceso de descentralización de los servicios educativos y de salud es otro aspecto que, si bien no ha sido estudiado en relación con el aumento de la protesta, es de crucial importancia para entenderla. A partir de 1989, los servicios educativos (sobre todo de educación media) y los de salud, comienzan a ser transferidos de la órbita del Gobierno Federal hacia las provincias (para estudios detallados del proceso, se puede consultar Rodríguez Larreta et al.; Rothen). Descentralización que profundiza la crisis de ambos sectores dado que las ad-

ministraciones provinciales tienen que afrontar esta nueva responsabilidad con sus ya escasos recursos financieros. Esto transforma a los gobiernos provinciales en objetos de demandas por parte de los, ahora también provinciales, empleados públicos. El aumento de la protesta por parte de docentes y trabajadores de la salud en las provincias (los llamados «jeringazos» en los hospitales públicos de Corrientes y los innumerables paros en la educación) son difíciles de comprender si no se tiene en cuenta que, como consecuencia directa del proceso de descentralización, lo que cambia es el blanco de las demandas, el *locus* de la acción colectiva; de reclamarle al Estado nacional antes responsable por salarios, condiciones de trabajo, infraestructura, etc. ahora la protesta se traslada al ámbito provincial –veremos cómo, en el caso de Santiago esto se expresa claramente en los inicios del conflictivo 1993.



Los cambios macroestructurales no afectan a la acción colectiva de manera directa sino que impactan en los medios y sentidos de la acción colectiva al modificar *intereses* (en términos un tanto simplificados podemos decir que de ser la defensa del salario, el *interés* dominante pasa a ser la defensa de fuentes de trabajo y luego la obtención de subsidios de desempleo); las *oportunidades* (al colocar a los gobiernos provinciales como objeto de demandas); y la *organización* de la gente común (convirtiendo a los gremios de empleados públicos y las nuevas y múltiples organizaciones de desempleados en actores principales de la protesta). Intereses, oportunidades y organizaciones que, en casos de generalizada corrupción en las administraciones provinciales y/o municipales, confluyen en la formación de una identidad beligerante que opone, por un lado, a manifestantes y, por el otro, a funcionarios y/o políticos.

La retirada del Estado y el hiperdesempleo vistos desde abajo

Cutral-co y Plaza Huincul se originan y desarrollan a partir de la actividad petrolera. Desde sus comienzos en 1933 y 1918 respectivamente, ambas ciudades

crecieron al ritmo (y se volvieron altamente dependientes) de los beneficios provistos por la extracción de petróleo y las actividades de la compañía estatal YPF. Al descubrimiento del «oro negro» en la región, le siguió su ocupación territorial y el asentamiento poblacional, ambos llevados a cabo bajo auspicio estatal. El rápido crecimiento demográfico de ambas ciudades refleja la expansión de las actividades de YPF: entre 1947 y 1990, el total de la población creció de 6.452 a 44.711 habitantes, un crecimiento impresionante bajo cualquier estándar. El Estado de bienestar representado por YPF otorgaba a sus obreros salarios más altos que el promedio nacional, viviendas modernas servidas por el mismo personal de la empresa («cualquier cosa que se rompía era arreglada por YPF», me comentaban ex-obreros de la compañía), acceso a un excelente hospital, obra social y vacaciones pagas («una vez al año, teníamos pasajes gratis y dos semanas de hotel pagas en Buenos Aires o en cualquier lugar del país»). El bienestar de YPF se extendía más allá de los límites de la empresa: toda la vida económica y social de la región estaba dinamizada por su presencia. YPF construyó barrios enteros, en otros realizó los tendidos de luz y cloacas, también construyó un hospital moderno, un teatro y un centro deportivo.

En menos de dos años, un sistema económico y una forma de vida que duró más de cuatro décadas se hizo trizas. La privatización de YPF fue sancionada por el Congreso en septiembre de 1992; desde un poco antes los devastadores efectos se hacían sentir en ambas comunidades. YPF no solo redujo su personal de 4.200 operarios a 600 en menos de un año (Favaro et al.), sino que dejó de ser la empresa-bienestar alrededor de la cual la vida de ambas ciudades giraba, convirtiéndose en una industria de enclave conducida bajo premisas estrictamente capitalistas.

Los titulares de los principales diarios regionales capturaron el clima de desconcierto generalizado cuando comenzaron a sentirse los primeros impactos de la «modernización del Estado»: «Futuro incierto aguarda a Cutral-co y Plaza Huincul», «Alarmante desocupación en zona petrolera», «La lucha por no ser otro pueblo fantasma». Mientras ocurrían los despidos masivos, los artículos en los principales periódicos describían el «sentimiento de incertidumbre» sobre los inicios de un proceso que hoy se encuentra en su forma avanzada: el hiper-desempleo. En Cutral-co, 30% de la PEA (25.340 habitantes) estaba desempleado en 1997. En la actualidad, más de la mitad de la población de ambas ciudades vive debajo de la línea oficial de pobreza (Favaro et al., p. 17)⁴.

4. En marzo de 2001, solo 35 I de los desempleados recibía subsidios (un promedio de 150 pesos) del gobierno nacional o provincial.

Lejos de allí, en el extremo norte del país, un residente de General Mosconi (provincia de Salta) describe a la ciudad en términos dolorosamente familiares para los cutralquenses y huinculenses: «Hace 10 años Mosconi se transformó en un pueblo fantasma. La privatización de YPF marcó el fin de una época dorada. Mi marido trabajó durante 20 años en el correo y siempre hablaba de los enormes aguinaldos que cobraban los empleados de la empresa petrolera. Ahora, la gente tiene que salir a cortar la ruta para recibir poco más que una limosna».

Mediaciones

Si algo nos han enseñado los estudios de la protesta, de los movimientos sociales, y de la acción colectiva en general en otras partes del mundo y otras épocas históricas –enseñanza que muchos analistas y periodistas que hablan sobre los eventos de diciembre de 2001 como producto casi automático de la indignación, del hambre, o de la desesperación, parecen olvidar– es que la miseria, la pobreza, la necesidad económica, el sufrimiento, el desempleo, el disgusto y la angustia colectivas, no se traducen necesariamente en movilización popular. Esto es, la protesta, el conflicto, la violencia, no son respuestas directas a las tensiones producidas por el deterioro de las condiciones de vida que surgen de las macro-transformaciones político-económicas sino que fluyen de los procesos políticos específicos. En otras palabras, los cambios macro impactan en el conflicto a través de la estructura de poder, dando forma a los medios organizativos y a los recursos que los distintos actores tienen a su disposición.

Para que la protesta ocurra, hacen falta redes asociativas previas que la activen (desde redes clientelares cuyos flujos de recursos se interrumpen dando lugar a la acción colectiva, como en el caso del Gran Buenos Aires entre 1999 y 2001, hasta redes organizativas surgidas al calor de protestas previas, como en el caso de Salta entre 1997 y 2001, o Jujuy de 1995 en adelante), oportunidades políticas que la hagan viable (el fraccionalismo entre elites suele abrir la puerta a la consecución de demandas en forma conjunta por actores que están fuera del sistema político –los casos del Correntinazo en 1999 y el Santiagazo en 1993 tal vez sean los ejemplos más claros–, y recursos que la faciliten (desde recursos materiales, como cubiertas para quemar y alimentos para sobrevivir día y noche en las barricadas, a veces provistos por grupos políticos opositores como en Cutral-co y Plaza Huincul, hasta recursos simbólicos con los cuales enfrentar los embates retóricos de los gobernantes). Una mirada a la última década de activismo popular en Argentina no puede dejar de tener en cuenta estos elementos si no quiere reproducir una visión mecanicista de la rebelión popular que ve en cada subida de precios, en cada alza de las tasas de desempleo, o en

*Así como
 la emergencia
 y curso de la protesta
 no se desprende
 de su contexto
 estructural,
 tampoco su sentido
 puede leerse
 directamente
 de la apremiante
 necesidad económica*

cada caída del nivel de vida una condición suficiente para el «estallido» (una sociología rigurosa de estas formas de acción colectiva debería comenzar por cuestionar las categorías entre políticas, periodísticas y policiales de «estallido» o «explosión» que ocultan más que develan los mecanismos y procesos en la raíz de la rebelión popular).

Así como la emergencia y curso de la protesta no se desprende de su contexto estructural, tampoco su sentido, el significado que sus protagonistas le dan a sus acciones beligerantes, puede leerse directamente de la apremiante necesidad económica (desde la falta de pago a los empleados públicos a la falta de empleo en los miles de desocupados) que la enmarca.

Si escuchamos más de cerca a los manifestantes en plazas, rutas y puentes, detectaremos la existencia de una directa impugnación a la llamada «clase política» como sentido omnipresente en las acciones de los manifestantes. El resto de este artículo, se centra en dos casos para examinar con más detenimiento este aspecto de la acción colectiva, dimensión que ha sido equivocadamente analizada como un indicador del carácter «antipolítico» de la protesta.

Santiago. Salarios y castigo

El 16 de diciembre de 1993, tres edificios públicos –Casa de Gobierno, Tribunales y Legislatura– y una docena de residencias privadas de políticos y funcionarios locales fueron invadidas, saqueadas e incendiadas por cientos de empleados públicos y vecinos de Santiago del Estero. Empleados estatales y municipales, maestras primarias y secundarias, jubilados, estudiantes, dirigentes sindicales y otros, reclamaban el pago de sus salarios, jubilaciones y pensiones (adeudados desde hacía tres meses), protestaban contra la implementación de políticas de ajuste estructural, y expresaban su descontento con la generalizada corrupción gubernamental. Conocido como Santiago, este episodio tiene características singulares en el sentido de que es una rebelión de gente «hambrienta e indignada» (como la describió buena parte de la prensa nacional) que convergió en las residencias particulares de funcionarios y en los símbolos del poder público, y en la cual prácticamente ningún comercio fue asaltado y no se conocen víctimas fatales.

Lejos de ser un estallido, el Santiagazo fue producto de una escalada en la beligerancia popular que comenzó a principios de 1993 (en enero de ese año se registran tres marchas y concentraciones, en diciembre más de 30) y que tuvo a los sindicatos docentes como protagonistas. Una de las líderes del sindicato docente (Cisadems) resume el proceso que desembocó en los eventos del 16 de diciembre. Nótese la importancia que el proceso de descentralización educativa y su articulación con mecanismos de cooptación política tienen en su relato:

En 1993 se concretaba la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias. Nosotros en ese momento nos oponíamos. Nuestro sindicato agrupaba justamente a las escuelas que serían transferidas en su totalidad. ... Lógicamente, empezamos a organizarnos para resistir esa transferencia de escuelas. Porque entendíamos que era una forma de desentenderse del Estado nacional, de ir abandonando el rol del Estado en la educación y su obligación indelegable de sostenerla. En enero de 1993 estábamos en la calle 7 u 8 personas, con un megáfono y un cartel (risas) ... denunciábamos que la transferencia de escuelas nacionales a la provincia iba a significar una gran pérdida de calidad educativa porque la provincia manejaba toda la cuestión educativa de una manera político-partidaria, o sea, se distribuían los cargos docentes con criterios de clientelismo político sin tener en cuenta la preparación del docente ni nada de eso. Denunciábamos que la provincia era absolutamente incapaz tanto en el aspecto económico-financiero, como administrativo de recibir semejantes escuelas grandes, y que históricamente habían estado más o menos bien administradas, desde la nación, y que ahora serían absorbidas por un Estado provincial ineficiente.

A principios de 1993, los manifestantes formulaban sus reclamos como empleados públicos de esta o aquella rama de la administración o como miembros de este o aquel sindicato (judiciales, maestras, jubilados, etc.). Las maestras se oponían a la transferencia de escuelas, reclamaban mejores salarios, su pago a término y mejoras en los establecimientos educativos; los trabajadores de la salud pedían por sus salarios, su aguinaldo y por recursos para sus hospitales; los profesores universitarios exigían aumentos de sueldos y mejoras en las condiciones laborales. Hacia junio del mismo año aumentaban la frecuencia de las protestas organizadas por los sindicatos, que en ocasiones convergían en marchas y actos en la plaza principal. Meses más tarde, si bien la protesta los encontraba juntos en las calles no surgía de una coalición. Sin embargo, en noviembre, el recientemente formado Frente de Lucha (que agrupaba a los principales gremios), convocaba a un acto masivo frente a la Casa de Gobierno y los Tribunales para protestar contra la recientemente sancionada ley de ajuste y demandar el «castigo a los culpables del robo y la corrupción». Hacia fines de 1993, los manifestantes ya no se veían a sí mismos como miembros de este o aquel sindicato sino como parte del «pueblo de Santiago» que enfrentaba en las calles a los «gobernantes corruptos». Este es el colectivo que «estalló» en la mañana del 16 no solo en reclamo de sus salarios impagos sino también en búsqueda de «cárcel a los corruptos». Todos mis entrevistados, refiriéndose a los ataques a las casas de los políticos y funcionarios locales, dicen «Se lo merecen». Este simple comentario ilustra lo que «todo el mundo en Santiago sabe» —que los ataques a



@ El Liberal (derechos cedidos al autor)

los notables constituyen una calculada retribución, «Queríamos arreglar cuentas con los poderosos y los corruptos», me dice Carlos, quien estuvo presente en las quemas de los tres edificios, y María, del sindicato docente, agrega en que el «Santiagoazo fue una lección para los políticos ... todo tiene un límite».

La foto muestra a José, de 40 años, con tres hijos, empleado público de la Dirección de Vialidad Provincial, portando la bandera argentina frente a la Casa de Gobierno en llamas. Al describir el sentimiento de los manifestantes, la manera en que éstos se veían a sí mismos, y el carácter relacional de su identidad colectiva, José encapsula buena parte del sentido que la protesta tuvo para sus protagonistas:

¿Para qué querían entrar a la Casa de Gobierno?

Nosotros queríamos entrar para correr a todo el mundo, no queríamos que nadie quedara ahí. No queríamos que realmente nadie quede ahí, que quede grabado. Y así es que yo entré a la Casa de Gobierno. ... Mi objetivo era subir al despacho del gobernador y tomar la bandera.

¿Para qué la querías?

Tener la bandera es como haber dicho: hemos ganado la guerra, el trofeo más valioso que podía existir ... haber recuperado la bandera, significaba algo glorioso para mí. Hemos ganado esta batalla, esta bandera es nuestra. Es decir, ¿cómo te podría explicar lo que uno siente cuando uno toma un símbolo así? Cuando vos ves una película de Estados Unidos, siempre hay una bandera, fijate que en todas las películas siempre está la bandera de por medio. En un despacho, en una formación militar, en un buque, siempre está la bandera. Y el hecho de tomar la bandera significaba haber ganado una guerra, porque para mí en ese momento era una guerra. ... Algún día la voy a enmarcar, la voy a poner en un marco, con pana de fondo, y el mástil abajo. La tengo escondida. Es el símbolo de haber ganado una guerra ... el santiagueño tomó la Casa de Gobierno y echó a un grupo de corruptos que manejaban en ese momento la vida del santiagueño.

Dentro de 10 años tu hijo te va a preguntar por la bandera, porque la vas a tener enmarcada...

(Riéndose.) En ese momento, lo voy a sentar y le voy a contar lo mismo que te estoy contando a vos...

Seis días en el sur, la pueblada

Entre el 20 y el 26 de junio de 1996, miles de habitantes de las vecinas localidades de Cutral-co y Plaza Huincul bloquearon las rutas de acceso al área interrumpiendo el tráfico de personas y vehículos durante siete días y seis noches. «Che, esto no es joda, acá hay gente bien vestida», dijo un gendarme cuando, arrasada la primera barricada (o «piquete») con gases lacrimógenos, balas de goma y agua lanzada desde un camión hidrante, vio que 20.000 personas esperaban a los menos de 200 uniformados (enviados por el gobierno nacional para despejar la ruta) en la Torre Uno de Plaza Huincul, el 25 de junio. Quizás sin saberlo, el gendarme estaba haciendo una observación sociológica sobre la composición de la multitud que reclamaba trabajo y la presencia del entonces gobernador neuquino, Felipe Sapag. La multitud, que había bloqueado el acceso a Plaza Huincul y a Cutral-co durante cinco días, incluía «gente bien vestida», no solo pobres y desocupados, y por tanto, «no era joda», esto es, era una protesta que excedía la capacidad represiva de la gendarmería, no solo por el número sino por la diversidad del «objetivo». Esta heterogénea multitud esperaba a la gendarmería entonando el himno nacional, cantando «Si este no es el pueblo, el pueblo dónde está», vivando a «Cutral-co y Plaza Huincul», y gritando «¡Que venga Sapag!». La jueza federal que comandaba el pelotón con la orden de despejar la ruta pidió hablar con representantes de esas 20.000 almas; en medio de la ruta los habitantes de Cutral-co y Plaza Huincul le espetaron: «Acá no hay representantes, acá está el pueblo ... venga a hablar con el pueblo». A cuatro años de la protesta, Laura, portavoz de la comisión de piqueteros, afirma: «Decir que esa fue una protesta de desocupados o de los excluidos, es hacer una mala lectura. Ahí estaba todo el pueblo». La evaluación de Laura fue y es compar-

@ El Liberal (derechos cedidos al autor)



tida por muchos habitantes de Cutral-co y Plaza Huincul. Durante los días de protesta, sus habitantes repitieron frente a las cámaras: «Nosotros queremos laburar. Les damos la luz, el gas, el petróleo y nos pagan así. ¡Que venga Felipe! Somos 30.000, no somos 5.000. ¡Está todo el pueblo!». «Acá no hay políticos, acá está el pueblo.»

Esta multitud-en-la-ruta se definía como *unida* («todo el pueblo está acá»); *numerosa* («somos 30.000, no 5.000»); *comprometida* con un objetivo («queremos trabajo, queremos que venga Sapag a darnos una solución»); *valiosa* («les damos la nafta, el gas, la electricidad...»); y *carente de líderes* («acá no hay políticos»). Tanto en las maneras de llamarse a sí misma como en su composición social, tanto en su discurso como en sus relaciones sociales, los manifestantes construyeron una identidad participativa que giraba alrededor de la noción de «pueblo».

Esta identidad insurgente, sin embargo, no surge de la nada ni de un sustrato siempre presente dispuesto a activarse frente a una situación objetivamente injusta (como si tal cosa existiese); es, por el contrario, una construcción colectiva y conflictiva. Durante seis noches y siete días en la ruta, los manifestantes realizaron incesantes esfuerzos por definirse a sí mismos diciendo quiénes eran y *no* eran. En las afirmaciones de Laura y de muchos otros piqueteros, el término «pueblo» tiene dos connotaciones diferentes. Por un lado, el «pueblo» se refiere a la localidad, a las ciudades de Cutral-co y Plaza Huincul. Las repetidas referencias a «todo el pueblo» apuntan, en parte, al hecho de que buena parte de la población de ambas ciudades estaba en la ruta. Y ambas ciudades estaban en la ruta para que el gobernador y «todo el país» reconozcan el proceso de extinción por el que rápidamente atraviesan luego de la privatización de YPF. En las representaciones de los habitantes, este es un pueblo muy especial porque provee de energía (gas y petróleo) al resto del país. Como grita un piquetero, a metros de los amenazantes gendarmes: «Les damos el gas, la nafta, la electricidad... ¿Y nos pagan así?». El piquetero se refiere de esta manera al pueblo-como-localidad, una significación que está profundamente arraigada en las creencias comunes de los habitantes de la región. Entre cutralquenses y huinculenses existe una creencia generalizada (arraigada, a su vez, en una pertinaz retórica nacionalista que describe a los habitantes como «dueños» del petróleo de la región) de que los recursos minerales de YPF les pertenecen. La frase «Nosotros les damos el gas, nosotros...» no es, pues, una expresión ideosincrática de este piquetero, sino que fue repetida en más de una ocasión durante la protesta reflejando un conjunto de creencias compartidas. En otras palabras, los entendimientos mutuos, las identidades colectivas que se forjaron en la ruta

durante esos días, encuentran sus raíces (sus bases materiales, diría) no solo en la situación actual de Cutral-co y Plaza Huinca como ciudades en peligro de extinción, sino en las memorias de los «tiempos de oro» de YPF y en una concepción compartida sobre la propiedad de los recursos naturales. Así, las memorias colectivas sobre el funcionamiento de un Estado de semi-bienestar durante el tiempo de YPF otorgan una suerte de ímpetu solidario para organizarse colectivamente y defender lo que se considera intereses de la ciudad. Este «nosotros» colectivo tiene dos preocupaciones fundamentales: la falta de oportunidades de trabajo, y los riesgos que implica para la sobrevivencia de ambas comunidades. Como afirma Mónica: «Yo amo este lugar, este paisaje. ¿Por qué me tengo que ir? ¡No! Si yo armé mi familia acá en Cutral-co, me dio posibilidades este paisaje. La plaza fue testigo de mis encuentros con el padre de mi hijo. Hay muchas cosas. Este Cutral-co le dio la posibilidad de nacer. ... A mí me costó mucho tener mi casa ¿por qué me tengo que ir? La pueblada fue sobre eso». O como sintetiza Zulma: «Nosotros queríamos fuente de trabajo ... queríamos que se terminara con esto de que no teníamos nada, que estábamos muy alejados del Gobierno, que el Gobierno no respondía, que no teníamos nada para que los chicos siguieran estudiando, *que esto se iba al carajo sin retorno, eso reclamábamos*».

*Existe,
sin embargo,
otra connotación
importante del
término «pueblo»
implícita en el rugir
de la multitud*

Existe, sin embargo, otra connotación importante del término «pueblo» implícita en el rugir de la multitud. Los manifestantes construyeron su identidad colectiva y sus demandas en términos democráticos contra lo que ellos percibían como oscuras negociaciones de los políticos y sus constantes intentos de «usar al pueblo». Desde el punto de vista piquetero, quiénes eran los manifestantes y por qué estaban en la ruta tiene tanto que ver con la devastación provocada por la retirada del Estado expresada en la privatización de la petrolera estatal, como con la ruina producida por las acciones interesadas de los políticos. Una perspectiva sensible a las palabras y las acciones de la multitud, a las demandas y a las creencias compartidas, nos alerta sobre el actor principal *en oposición al cual* los piqueteros construyen su identidad: la «clase política» o, en términos de Laura, «Las personas que están al mando ... las personas que dicen que más adelante voy a hacer esto, si me votan, voy a hacer aquello». Sin sus representantes habituales (o, mejor dicho, a pesar de sus representantes) los manifestantes pueden hacer oír su voz de descontento por el rápido deterioro de ambas comunidades y hacérselo saber al resto del país. «Por una vez», Laura y muchos otros piqueteros repiten una y otra vez, «los políticos no nos pudieron usar».

Conclusiones

Durante los últimos años se ha escrito mucho sobre la beligerancia popular en el país, pero se ha investigado poco. Hay quienes aún siguen viendo en la acción colectiva de los manifestantes una multitud enardecida, casi irracional, que solo se calma con una bolsa de comida o con un subsidio de empleo, una muchedumbre hambrienta capaz de todo, gente pura y simplemente harta que, como loca, sale a la calle o a las rutas, a cortarlas. A veces se exceden y prenden fuego a algún edificio público como en Santiago del Estero, Salta o Jujuy. Hay otros, desde posiciones ideológicas opuestas, que ven en cada protesta, corte o ataque a un edificio público, un indicador del surgimiento de una suerte de Gran Movimiento contra el ajuste, el neoliberalismo o –los más optimistas– contra el capitalismo. El piquetero es la imagen inversa del manifestante desesperado: un sujeto de inquebrantable y racional voluntad. Curiosamente, ambas posiciones siguen dominando las discusiones, a expensas de los (por cierto escasos) análisis fundados en la investigación empírica. Son pocos los que se han tomado el trabajo de mirar de cerca a los manifestantes y a sus formas de acción sin imponer sentidos que tienen más que ver con lo que uno quisiera ver que con lo que realmente está sucediendo.

Durante bastante tiempo, periodistas y académicos hablaron de la poca oposición que el «modelo» económico suscitaba, sin registrar lo que cualquier observador atento a la dinámica beligerante en el llamado «interior» podría ver, un ciclo de alta movilización popular con innovaciones importantes en las formas y en los sentidos de la acción colectiva. Puede que la efectividad de la protesta aumente cuando «golpea a las puertas de la capital», pero eso no es excusa para no observarla con detenimiento cuando ocurre en algún remoto rincón del país –y (solo) se ve en el aparato de televisión. Solo mirando más de cerca y más allá de los estrechos límites de los escenarios centrales del poder podremos entender las transformaciones en la acción colectiva.

En el transcurso de la última década surgieron muchas organizaciones que han de marcar el pulso de la acción colectiva en los años venideros. Se podría nombrar algunas de las que ocupan las tapas de los diarios y preocupan a las autoridades: Federación de Tierras y Vivienda; Movimiento de Trabajadores Desocupados; Corriente Clasista y Combativa; Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados; Movimiento Territorial de Liberación; Polo Obrero; Coordinadora Aníbal Verón; Movimiento de Trabajadores Teresa Rodríguez. Multiplicidad de organizaciones con diferencias políticas, ideológicas y tácticas importantes pero que dan cuenta del ritmo que ha tenido la beligerancia popular en los últimos

años. Nadie puede predecir cuál será su destino, ni el de la protesta en general. Es difícil calibrar el impacto inmediato que la acción colectiva tiene en las instituciones democráticas y en la cultura política, si esto servirá o no, citando a la maestra santiagueña, de «lección para los políticos». La inmediatez, la urgencia de las discusiones sobre la situación actual en el país, sobre las «motivaciones» de los manifestantes, sobre la presencia o no del proverbial agitador entre la multitud, sobre el carácter anárquico, espontáneo u organizado de la protesta, sobre la violencia que se produce en las manifestaciones (quizás haga falta recordar que la violencia colectiva es producto de una *relación* entre Estado y ciudadanos, más que de intenciones individuales, y que hasta donde muestra la evidencia la mayor parte de la violencia física



en estos 10 años –medida en muertes y heridas físicas durante acciones colectivas– ha sido producida por agentes del Estado) nos puede hacer perder de vista lo que sí sabemos sobre el efecto que la acción colectiva beligerante ha tenido en la democracia, en otros tiempos y lugares. La lucha popular, en el largo plazo, incide de manera positiva en la trayectoria democrática. No se trata de un optimismo celebratorio sino de una lectura detenida del registro histórico. Como señala Tilly (1997a), sin duda uno de los más perspicaces analistas de la relación entre protesta y vida democrática a través de la historia:

Las instituciones democráticas duraderas surgen de luchas repetidas, de largo plazo, en las que trabajadores, campesinos, y otra gente común han estado involucrados ... las revoluciones, rebeliones y movilizaciones de masas marcan una diferencia significativa entre un país y otro con respecto al alcance de la democracia.

Cuando se escribe sobre los grupos subalternos –y más aún cuando procuramos entender sus acciones conjuntas– siempre navegamos entre dos posiciones extremas igualmente perniciosas: interpretaciones miserabilistas e interpretaciones populistas. Bajo la influencia de las primeras, tendemos a ver la protesta como el acto inconducente, derrotado desde su inicio, de las víctimas de un sistema todopoderoso. Bajo la influencia de las segundas (sin duda más predominantes entre los científicos sociales), nos disponemos a ver en cada protesta un acto de resistencia heroica de un «pueblo» invulnerable, sin rastros de dominación ni de las cicatrices que (sin duda) dejan la miseria y la destitución. La tarea, si uno quiere comprender la dinámica beligerante, es evitar caer en

esta nociva antinomia y observar con más detenimiento no solo a la protesta sino a las continuidades que esta tiene con la vida cotidiana de quienes por días, semanas o meses expresan su frustración, su necesidad, su desesperación y/o sus demandas en las rutas, calles y plazas del país. Allí, en ese ir y venir, del barrio a la barricada, al corte o a la plaza, se encuentran muchas de las respuestas a los interrogantes que aún tenemos sobre la beligerancia popular.

Bibliografía

- Aguilar, M.A. y E. Vázquez: «De YPF a La Ruta: un acercamiento a Tartagal» en Marta Panaia, Susana Aparicio y Carlos Zurita (eds.): *Trabajo y población en el Noroeste argentino*, La Colmena, Buenos Aires, 2000, pp. 327-345.
- Barbeito, A. y R. Lo Vuolo: *La modernización excluyente*, Losada, Buenos Aires, 1992.
- Beccaria, L. y N. López (eds.): «Notas sobre el comportamiento del mercado de trabajo urbano» en Luis Beccaria y Néstor López: *Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina*, Losada, Buenos Aires, 1996, pp. 17-46.
- Cetrángolo, O. y L. Golbert: «Desempleo en Argentina: magnitud del problema y políticas adoptadas», CECE, Serie Estudios N° 8, Buenos Aires, 1995.
- Edelman, M.: «Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics» en *Annual Review of Anthropology* N° 30, 2001, pp. 285-317.
- Farinetti, Marina: «¿Qué queda del movimiento obrero? Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina» en *Trabajo y Sociedad* N° 1, 7-9/1999, <<http://habitantes.elsitio.com/proit/zmarina.htm>>.
- Farinetti, Marina: «El estallido: la forma de la protesta», Buenos Aires, 2000, manuscrito.
- Favaro, O. et al.: «La conflictividad social en Neuquén. El movimiento cutralquense y los nuevos sujetos sociales» en *Realidad Económica* N° 148, 1997, pp. 13-27.
- Golbert, L.: «Viejos y nuevos problemas de las políticas asistenciales», CECE, Serie Estudios N° 12, Buenos Aires, 1996.
- Gould, Roger: *Insurgent Identities: Class, Community, and Protest in Paris from 1848 to the Commune*, University of Chicago Press, Chicago, 1995.
- Merklen, D.: *Asentamientos en La Matanza. La terquedad de lo nuestro*, Catálogos, Buenos Aires, 1991.
- Murmis, M. y S. Feldman: «De seguir así» en Luis Beccaria y Néstor López (eds.): *Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina*, Losada, Buenos Aires, 1996.
- Prevot Schapira, M.: «Las políticas de lucha contra la pobreza en la periferia de Buenos Aires, 1984-1994» en *Revista Mexicana de Sociología* N° 59/2, 1996, pp. 73-94.
- Rodríguez Larreta et al.: «Descentralización de políticas sociales», segundo informe de avance, Buenos Aires, 2000.
- Roth, D.: *Global-Local Conditions of Possibility: The Case of Education Decentralization in Argentina*, Department of Education, Stanford University; 2000, disertación de doctorado.
- Schuster, Federico: «La protesta social en la Argentina democrática: balance y perspectivas de una forma de acción política», Buenos Aires, 1999, manuscrito.
- Scribano, Adrián: «Argentina 'cortada': cortes de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste» en Margarita López-Maya (ed.): *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años del ajuste*, Nueva Sociedad, Caracas, 1999, pp. 45-72.
- Tarrow, Sidney: *Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics*, Cambridge University Press, Nueva York, 1998.
- Thompson, E.P.: *Customs in Common*, The New Press, Nueva York, 1993.
- Tilly, Charles: *The Contentious French*, Harvard University Press, Cambridge, 1986.
- Tilly, Charles: «How to Detect, Describe, and Explain Repertoires of Contention» en *The Working Paper Series. Working Paper N° 150*, New School for Social Research, 1992.
- Tilly, Charles: «Parliamentarization of Popular Contention in Great Britain, 1758-1834» en *Theory and Society* N° 26, 1997a, pp. 245-273.
- Tilly, Charles: *Roads From Past to Future*, Rowman and Littlefield, Lanham, 1997b.